

# La encrucijada en el camino

El electorado venezolano escogió a Rafael Caldera para presidir un gobierno en una etapa crucial de la transición social que vive la sociedad venezolana. Los resultados electorales, tanto presidenciales como parlamentarios, confirman lo que otros signos de la vida nacional —conmociones sociales, aumento de la violencia, insurgencias militares, incertidumbre y desasosiego generalizado, ...— han venido expresando: el quiebre de los cimientos de los acuerdos sociales básicos y la inexistencia de un piso firme, sólido donde asentar los consensos sociales básicos necesarios para avanzar hacia un horizonte compartido.

La conciencia de la magnitud y profundidad de la crisis que vivimos y de que no hay vuelta atrás no es todavía patrimonio colectivo. Percibimos una enorme brecha entre la velocidad de los cambios tanto económicos como políticos y las actitudes y motivaciones profundas de diversos sectores de la población. Puede parecer «normal» que los cambios en la cultura política, en la sensibilidad y motivaciones de las personas sea más lento que las transformaciones económicas y políticas. Lo alarmante es que se produzca una brecha explosiva entre ambos procesos. A ese punto nos vamos acercando.

Algunos analistas piensan que ningún pueblo aprende hasta que no pasa por las consecuencias más duras de la crisis: hiperinflación, desempleo, insuficiencia de los servicios públicos... El crecimiento de la brecha entre cultura política y proceso económico-político nos puede conducir a un trágico dilema entre un saneamiento económico con injusto aumento del empobrecimiento, impuesto a base de autoritarismo represivo, o una paz social a corto plazo a costa del retroceso económico. El Gobierno que comienza tiene la enorme responsabilidad de encontrar el camino que nos aleje de este dilema, que revierta la tendencia al crecimiento de la brecha entre la dinámica socio-económica y las percepciones culturales. Estamos ante una encrucijada de nuestro camino histórico. Un camino nos lleva al peligroso dilema esbozado. El otro a la negociación de acuerdos básicos que permitan construir las relaciones sociales del futuro, superando las que se han resquebrajado, sin echar por la borda las lecciones aprendidas.

## El gobierno de Ramón Jota

La toma de posesión de un Presidente de la República en el escenario de un Congreso Nacional fruto de una consulta electoral es un punto a favor del Gobierno transitorio de Ramón J. Velásquez. Una vez que se ha llegado a esta trasmisión pacífica podemos olvidar que en junio

pasado no era el «escenario» más probable. Este era el principal «mandato» del Gobierno Velásquez. Haberlo realizado en medio de tensiones sociales, políticas y militares imprevisibles al momento de asumir la sustitución de Carlos Andrés Pérez no ha sido fácil.

De los escasos ocho meses del Gobierno Velásquez es importante sacar una lección: del reconocimiento de la necesidad de promover y conseguir un «acuerdo nacional» a hacerlo realidad no se pasa automáticamente. Ramón J. intentó avanzar hacia él y no consiguió más que evasivas, diferimientos, críticas... de los dirigentes políticos y empresariales. En contraste con sus declaraciones verbales, la decisión había sido esperar hasta diciembre «a ver qué pasa». En la práctica la dirigencia nacional utilizó a Velásquez como «salvavidas» y no lo consideró ni interlocutor ni convocante del necesario «acuerdo».

Uno de los aspectos más difíciles de evaluar es la relación entre Ramón J. y el Alto Mando Militar. Para los más críticos resulta claro que quienes gobernaron fueron los militares. La actuación pública del Ministro de la Defensa, Vicealmirante Radamés Muñoz León, da suficiente pie a esa interpretación. Diversos sectores sociales hubieran preferido un Ministro de la Defensa más discreto y un Presidente públicamente más enérgico, que hubiera sido capaz hasta de sustituir al Ministro. Lo que es cierto es que no se produjo ningún golpe de la cúpula militar (en alianza con sectores financieros y políticos, incluso vinculados a los grandes partidos), y esa posibilidad nunca estuvo del todo descartada. No cabe duda de que la actuación de Ramón J. tiene relevancia en este resultado.

La extraña salida de la cárcel del capo Larry Tovar Acuña, indultado por el Presidente de la República, puso de manifiesto las peligrosas grietas existentes en la oficina presidencial.

Si, como se acepta, fue sorprendido en su buena fe, lo que resulta preocupante es la fragilidad de los mecanismos mediante los cuales se toman decisiones y emiten documentos oficiales en las oficinas de Miraflores. Que el Presidente Velásquez se entere de una resolución firmada por él que debía venir de una instancia de su máxima confianza, como es su Consultoría Jurídica, pasar por el «control» de dos Ministros (Justicia y Secretaría de la Presidencia) y tramitarse por los canales más confiables (Secretaría privada, Dirección de la Gaceta Oficial de la República) y en el que resultan implicados funcionarios como el Secretario del Consejo de Ministros, el Director General de Bienestar Social del Ministerio de Justicia y el Director de un centro penitenciario, es un toque de alarma que no puede pasarse por alto.

La permanencia de la nefasta dinámica de nuestra estructura social por la que todo se subordina al «negocio» y no se pregunta sobre la licitud de los medios para obtener o aumentar las ganancias ha quedado de manifiesto con las explosiones carcelarias, especialmente con la matanza en la Cárcel Nacional de Maracaibo (Sabaneta) en los primeros días de enero, y la especulación desatada a raíz de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en octubre y en enero. Esta dinámica social genera la sensación de una «ausencia de gobierno» tal, que acelera el proceso hacia la anomia social y aumenta la deteriorante sensación de inseguridad que embarga a los venezolanos.

## Un Quinquenio para Caldera

Los cinco años del periodo presidencial que se inicia pueden resultar tan insuficientes como los meses de Ramón J. para enrumbar la sociedad venezolana hacia la reconstitución de sus relaciones básicas.

En ese proceso el aspecto fundamental es propiciar la auténtica participación popular. Caldera ganó las elecciones con el voto de los sectores más pobres de la población. Si entiende su liderazgo y labor de Gobierno como «complacer» a sus votantes desde las alturas del poder, nos alejamos de una solución de fondo de la crisis actual. Caldera se enfrenta a la tarea de responsabilizar a la gente del presente y futuro del país. Si al final de este quinquenio no se han dado pasos reales hacia la participación consciente y constante de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión colectivos no hemos hecho sino sortear el temporal acudiendo a un experimentado timonel.

El primer paso es partir de la realidad. Ayudar a que los venezolanos nos enfrentemos con la desnuda verdad de nuestra compleja situación y la aceptemos como el punto de partida del camino a recorrer es una de las primeras responsabilidades del Presidente Caldera. Su talla como líder se medirá por la capacidad de promover la participación ciudadana adulta, dejando atrás figuras «paternales» que prolonguen una dependencia infantil a una sociedad que, por ratos, prefiere cerrar los ojos ante su realidad y dejar que sean sus «dirigentes» quienes enfrenten por ellos los problemas aunque después se lo echen airadamente en cara. Caldera tiene las condiciones para actuar como líder y la tentación de hacerlo como «mesías». Que sea una cosa o la otra depende, en primer lugar, de sus propias actitudes, pero también, y a la par, de nosotros, del resto de la sociedad civil, de nuestra capacidad de asumir responsablemente la «cosa pública».

En ese sentido un esfuerzo de singular importancia es reducir al mínimo el manejo manipulador de la información, en lo cual el Gobierno tiene un papel insustituible. Un Gobierno que se comunica con la sociedad con la verdad por delante, deja menos espacio a la manipulación interesada de quienes manejan los medios de comunicación en función de intereses particulares y no sociales. Si el Gobierno toma la iniciativa de comunicarse a través de un lenguaje veraz, que transparente el fondo de sus intenciones, en el que no haya trastienda y cuyo fundamento sea el resguardo del interés público, del bien común, se hará posible exigir un comportamiento ético a los demás actores de la vida social y exigir pulcritud en la trasmisión de sus mensajes a los medios de comunicación.

La sensación que generó el Presidente Caldera desde su elección es que no tiene un plan detallado de lo que va a hacer desde el Gobierno. Desde un punto de vista, esto es muy criticable, porque suena a mesianismo, improvisación, doble lenguaje, oportunismo... Desde otro punto de vista, abre campo a una mayor participación real en la tarea del Gobierno. Caldera durante su campaña y después ha enunciado principios guías, su «intención» como gobernante. No se han precisado los «cómo» de muchas cosas. Por

ejemplo, cómo sustituir en la práctica al IVA como fuente de ingreso fiscal por tributos más justos en sí mismos y que contribuyan a equilibrar las cargas sociales por la vía de una mejor distribución del ingreso. Conformar un equipo coherente de gobierno, capaz de tomar medidas y producir iniciativas legislativas que marquen el rumbo hacia una sociedad más justa y participativa no es fácil pero tampoco imposible.

A corto plazo el Gobierno de Caldera tiene que enfrentar consistentemente el problema de la inseguridad ciudadana y el aumento persistente de la violencia social. Si no se detiene el camino hacia la anarquía, en lugar de sentar las bases de una sociedad democrática terminaremos bajo la sombra de algún régimen autoritario. Las raíces de esa violencia están hundidas en una estructura social injusta con manifestaciones tan terribles como la impunidad ante los delitos con fuerte complicidad de los cuerpos policiales y del sistema judicial en su conjunto (cárceles, tribunales...). El consumo de drogas y el narcotráfico es una de las más notables manifestaciones de lo que venimos diciendo. Parece que no hubiera poder alguno para enfrentar este flagelo que no se limita a dañar vidas jóvenes por los efectos de la adicción a sustancias nocivas, sino que carcome las instituciones del Estado y acaba con la paz social.

Otra dimensión de la tarea del próximo quinquenio es la recuperación de la legitimidad de las instituciones públicas. Este es un tema y una preocupación de toda la vida del Presidente Caldera. En este momento se torna en un desafío crucial para el país. El Estado venezolano no sólo se ha deteriorado en su talante ético-moral y en su capacidad de servir a sus ciudadanos, sino que su estructura está desfasada en el tiempo, no se corresponde con el desarrollo del cuerpo social. Por consiguiente, hay que acometer la urgente tarea de sincerar al Estado para hacerlo el instrumento que necesita una sociedad asentada en bases más democráticas como corresponde a una fase adulta de su desarrollo. Dentro de ese reto tiene especial importancia que los políticos, entendiéndose como servidores públicos y no como agentes de intereses particulares, rompan con las viejas mañas de rendirle cuenta a su «tolda» partidista y se comprometan personalmente como representantes del colectivo, aportando a la discusión de los problemas y a las acciones para solventarlos, su conocimiento, experiencia y compromiso personal.

La política económica es otro gran desafío del Gobierno que comienza. El mensaje de los electores parece claro en la orientación general que se pretende: basta de una política económica sin alma, que dé más importancia a los equilibrios macroeconómicos que a los efectos directos en el deterioro de la vida de las personas, especialmente de los más pobres. Una política económica cuyo objetivo sea la justicia social, en la que no se subordinen los objetivos sociales a los equilibrios macroeconómicos o los requerimientos de la producción, justificados con el sofisma «primero producir para luego distribuir», parece ser el horizonte en el que es posible un consenso social. En esa dirección hay cuestiones urgentes: la primera, evitar un déficit fiscal que convierta la inflación en el cáncer del poder adquisitivo de la población mediante un sistema tributario que tienda a mejorar la actual distribución del ingreso. La segunda, la negociación del cambio de régimen de las prestaciones sociales en el marco de lograr un efectivo sistema de seguridad social que incluya una digna jubilación para los trabajadores. Las presiones de los empleadores para eliminar ese régimen de manera de reducir aún más lo que reciben los trabajadores son muy fuertes. El mismo Estado puede caer en la tentación de comportarse como un empleador privado al tomar conciencia de lo difícil que a va ser obtener los recursos necesarios para honrar los compromisos adquiridos con sus empleados. Cómo se resuelve la cuestión de las prestaciones será un importante indicador de lo que significa una política económica cuya prioridad es la gente. Intentar una solución a fondo de este problema, así como iniciar la negociación de los contratos colectivos de los funcionarios del Estado que acaban de vencerse, requiere erradicar de una vez por todas el gremialismo entorpecedor de los sindicatos partidizados y abrir los cauces para una representación directa y democrática de los trabajadores en auténticas organizaciones sindicales autónomas.

Vamos a vivir un tiempo de tensiones sociales. Otro gran desafío es manejar las tensiones sociales por la vía de la negociación política y social en lugar de por la represión y la fuerza. Nuestra cultura política tiene el autoritarismo a flor de piel que lleva espontáneamente a pensar en el uso de la fuerza para aplacar o dirimir conflictos sociales. Las bases de una sociedad democrática son el resultado de un proceso en sí mismo democrático. De esa manera es como queremos hacer camino al andar.